



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Magistrado Ponente: ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ

San José de Cúcuta, veintitrés (23) de junio de dos mil diecisiete (2017)

Acción: TUTELA - INCIDENTE DE DESACATO
Expediente N°: 54001-23-33-000-**2016-01450-00**
Demandante: GLADYS LEONOR JÁUREGUI DUMES en calidad de agente oficioso del señor JOSÉ LUIS JAIMES.
Demandado: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD – CAFESALUD EPS.

OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE lo resuelto por el HONORABLE CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, en proveído del veintinueve (29) de marzo de dos mil diecisiete (2017), por el cual esa superioridad CONFIRMÓ el auto consultado, de fecha diez (10) de febrero de dos mil diecisiete (2017), proferido por esta Corporación.

Sería del caso proceder a analizar la solicitud de inaplicación de la sanción impuesta por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el día 10 de febrero de 2017, sino se observara que dicha sanción fue confirmada por el Honorable Consejo de Estado mediante providencia del 29 de marzo de 2017, quedando en firme la actuación incidental y por ende la sanción impuesta en su oportunidad, razón por la cual esta corporación carece de competencia para inaplicar la sanción impuesta, máxime si se le garantizó el debido proceso al funcionario sancionado y este no acreditó el acatamiento a la orden de tutela de fecha 18 de enero de 2017.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

PRIMERO: OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE lo resuelto por el Honorable Consejo de Estado en auto de fecha 29 de marzo de 2017, de conformidad con la parte motiva.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de inaplicación de la sanción impuesta por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander el día 10 de febrero de 2017, confirmada por el Honorable Consejo de Estado mediante providencia del 29 de marzo de 2017, por las razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO: NOTÍFQUESE la presente decisión a las partes, para que una vez en firme este proveído se proceda al archivo del expediente, previo el registro correspondiente.

NOTÍFQUESE Y CÚMPLASE,


TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
Magistrado. CONSTANCIA SECRETARIAL

Por anotación en **ESTADO**, notifico a las partes la providencia anterior, a las 8:00 a.m.

hoy **12.8 JUN 2017**

Secretaría General



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER
San José de Cúcuta, veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete (2017)

Proceso Rad: 54-001-23-33-000-2017-00416-00
Accionante: José de la Cruz Cáceres y otros
Demandado: Municipio de Toledo
Medio de Control: Reparación de los perjuicios causados a un grupo

En atención al informe secretarial que antecede y una vez revisado el expediente, encuentra el Despacho que no hay lugar a avocar conocimiento del expediente de la referencia por parte de este Tribunal, y en consecuencia lo procedente será devolver el mismo al A quo remitente a fin de que continúe con el trámite normal del mismo, conforme las siguientes razones:

I.- Antecedentes.

1.1 - La demanda de la referencia fue presentada por un grupo de habitantes del Municipio de Toledo quienes se anuncian como damnificados de la ola invernal del 01 de septiembre al 10 de diciembre de 2011, y fue dirigida en contra del Municipio de Toledo, la cual fue repartida al Juzgado Octavo Administrativo Mixto del Circuito de Cúcuta¹

Las pretensiones de la demanda se concretan en declarar que el Municipio de Toledo vulneró los derechos de los damnificados y por tal razón se condene al pago de un millón quinientos (\$1'500.000.00) más la indexación e intereses, en favor de cada jefe de hogar de las familias damnificadas.

El fundamento de las pretensiones lo concretan en señalar que la administración incurrió en tres omisiones administrativas, al no remitir la documentación necesaria a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, tal como lo exigía la Resolución No. 074 de 2011, y con ello se imposibilitó a cada familia damnificada para recibir un apoyo económico hasta por un millón quinientos mil pesos

1.2.- Mediante auto de fecha catorce (14) de marzo de dos mil diecisiete (2017)², el Juzgado Octavo Administrativo Mixto del Circuito de Cúcuta, se declaró con falta de competencia por el factor territorial para conocer de la demanda de la referencia, dado que por la ocurrencia de los hechos y el domicilio de los demandantes, el mismo pertenece al Circuito de Pamplona.

En virtud de lo anterior, mediante oficio No 0618 de fecha 30 de marzo de 2017³ el expediente fue enviado a la oficina de reparto de Pamplona y mediante acta de reparto de fecha 03 de abril de 2017⁴, le correspondió el conocimiento del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pamplona

1.3.- Mediante auto de fecha veintiséis (26) de mayo de dos mil diecisiete (2017)⁵, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Pamplona, sin haber decidido sobre la admisión o no de la demanda, tal como lo establece el artículo 53 de la ley 472 de 1998, decidió vincular a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, afirmando que de las resultas de la presente acción, podría verse afectada favorable o desfavorablemente, en

¹ Folio 1 del C. Principal.

² Folio 40 del C. Principal

³ Folio 61 del C. Principal

⁴ Folio 62 del C. Principal

⁵ Folio 40 del C. Principal

razón a que dicha entidad según lo previsto en la Resolución No. 074 de 2011, tiene entre sus funciones, ordenar el pago del apoyo económico de las personas afectadas por la temporada invernal denominada "Fenómeno de la niña".

En razón de dicha vinculación, y por ser la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo una entidad de orden nacional, con fundamento en el numeral 16 del artículo 152 del CPACA y en concordancia con los artículos 16 y 17 del C.G.P., dentro del mismo auto resolvió declarar la falta de competencia subjetiva, ordenando la remisión del expediente, a esta Corporación.

1.4.- Mediante oficio del 09 de junio del 2017, folio 68, se remitió el proceso a este Tribunal, habiendo sido repartido a este Despacho mediante Acta del 12 de junio de 2017, que obra del folio 69-70, y pasado por Secretaría al Despacho el 14 de junio de 2017, mediante informe visto al folio 71

II.- Decisión del Despacho.

Este Despacho ha llegado a la conclusión de que el expediente de la referencia no puede ser conocido por este Tribunal en primera instancia, y por lo tanto el mismo deberá devolverse al Juzgado de origen para que continúe con el trámite de ley, conforme las siguientes razones.

1.- De acuerdo a lo establecido en la ley 1437 de 2011 (CPACA), la competencia de los Tribunales y Juzgados en primera instancia se encuentra dispuesta en los artículos 152 y 155 ídem de la siguiente manera.

En el numeral 16 del art. 152 del CPACA, se establece que el Tribunal es competente en primera instancia para conocer de los procesos relativos a la reparación de daños causados a un grupo que se promuevan contra las autoridades del orden nacional.

Ahora bien, conforme al numeral 10 del art. 155 del CPACA, la competencia recae en los Jueces en primera instancia, cuando los procesos relativos a la reparación de daños causados a un grupo se promuevan contra las autoridades de los niveles departamental, distrital, municipal o local o las personas privadas que dentro de esos mismos ámbitos desempeñen funciones administrativas.

Así las cosas, se tiene que en el presente caso la demanda se presentó en contra del Municipio de Toledo, Norte de Santander, planteándose las pretensiones exclusivamente contra dicho ente territorial, por lo tanto la competencia para conocer de la misma le corresponde al Juzgado Administrativo de Pamplona en primera instancia, con base en lo previsto en el numeral 10 del artículo 155 del CPACA, despacho al cual se devolverá el expediente para que continúe conociendo del mismo.

2.- Sin perjuicio de lo anterior, el Despacho no puede aceptar la tesis del a quo, en el sentido de remitir el expediente a este Tribunal, al considerar que por la vinculación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la competencia del mismo le corresponda a esta Corporación, por las siguientes razones:

a.-) En el presente caso, la Jueza de instancia no había decidido sobre la admisión o no de la demanda, por lo que resulta extraño que antes de admitirla y sin haberse trabado la litis, haya decidido de oficio vincular a una entidad del orden nacional como parte accionada, para luego concluir que carece de competencia para conocer del asunto por la naturaleza de esta última entidad.

Y se resalta por el Despacho que resulta exótica tal actuación, por cuanto en los términos del artículo 61 del C.G.P., la posibilidad de integración del contradictorio solo puede darse a partir del auto que admite la demanda, y en el evento que no se haga en el auto admisorio se puede hacer en el curso del proceso hasta antes de proferir sentencia de primera instancia. En el mismo sentido, se tiene que en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998, se establece que el juez de primera instancia de oficio puede ordenar la citación de un tercero cuando en el curso del proceso se establezca que existen otros posibles

responsables, es decir cuando ya se haya trabado la litis y el proceso se encuentre en curso. Es de precisar que si bien es cierto, pareciera que la regla referida aplica solamente para acciones populares, también lo es que resulta relevante para considerar que la intención del legislador es que las decisiones sobre vinculación de terceros deben darse cuando un proceso determinado se encuentre en curso y hasta cuando se dicte sentencia de primera instancia.

b.-) Ahora bien la citación a un proceso de un tercero de oficio como litisconsorte necesario, solamente procede cuando el juez llega a la conclusión que no puede proferir sentencia de mérito, sin la comparecencia de todas las personas que participaron en el acto jurídico del cual se derivan las pretensiones de la demanda, y dado que el accionante haya pretendido demandar a todos ellos.

Importa precisar que la ley 472 de 1998 no regula expresamente en el título sobre la acción de grupo, la figura de la intervención de terceros, pero en el artículo 68, ibídem, se ordena que la remisión, en lo que no contrarié lo previsto para las acciones de grupo, se hace con el Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso.

En el artículo 71 y ss de dicho Código se prevé la intervención de terceros en los procesos, en calidad de coadyuvantes y por llamamiento de oficio. A partir del artículo 60, ibídem, se consagran las figuras de litisconsortes facultativos, litisconsorcio necesario e integración del contradictorio, litisconsorcio cuasi necesario, intervención excluyente y llamamiento en garantía.

En el auto del 26 de mayo de 2017, la Jueza de instancia no precisó expresamente en qué condición, de las referidas anteriormente, es que decidió vincular a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entendiendo este Despacho que cómo se le vinculó como sujeto pasivo, se está haciendo en calidad de litisconsorcio necesario por pasiva.

Así las cosas, este Despacho estima que en el presente asunto no es procedente vincular a la citada Unidad como parte accionada, ya que de acuerdo cómo sucedieron los hechos que sirven de causa a las pretensiones, la Unidad no participó en la omisión de la remisión de la documentación que se reprocha por los accionantes a la Administración Municipal de Toledo.

Es evidente, entonces, que en el presente asunto la Jueza de primera instancia sí puede dictar sentencia de mérito respecto del Municipio de Toledo, pues si se llegare a probar que causó un daño antijurídico imputable al Municipio por omisión, pues puede dictar sentencia de condena, y en caso contrario, pues podía negar las pretensiones de la demanda que se dirigió exclusivamente en contra del Municipio de Toledo.

Finalmente, estima este Despacho que en los términos del artículo 27 del C.G.P., el hecho de que la Jueza decida vincular a una entidad del orden nacional dentro de un proceso que de acuerdo a las pretensiones y hechos, la competencia es del Juzgado administrativo, no altera la competencia para seguir conociendo del mismo, pues justamente en dicha norma lo que se prevé es que la competencia no se variará por la intervención sobreviniente de personas que tengan fuero especial, salvo cuando se trate de la vinculación de un Estado extranjero o un agente diplomático, pues frente a tales personas la competencia es exclusiva de la Corte Suprema de Justicia.

No puede compartir este Despacho la tesis del A quo, pues ello equivaldría a aceptar que en cualquier proceso de medio de control popular, de cumplimiento, o de grupo, de competencia de un Juez Administrativo, cuando éste decida, con razón o sin razón, vincular a una entidad del orden nacional, entonces el proceso deba ser conocido por el Tribunal en primera instancia. Si ello fuere así el Tribunal terminaría conociendo todos los procesos de esta clase en primera instancia y el Consejo de Estado en segunda instancia, cuando los hechos y pretensiones apuntan a que se trata de actuaciones realizadas por autoridades municipales, como en el presente asunto donde los actores solamente demandan al Municipio de Toledo por unas omisiones de su Administración.

En el presente caso, los accionantes solo demandaron al Municipio de Toledo Norte de Santander, como causante del daño el cual afirman se generó por tres omisiones administrativas del señor alcalde de dicho municipio en el envío de información a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en las fechas establecidas por esta última, tal como lo preveía la Resolución No 074 de 2011, para poder acceder a un apoyo económico hasta por un valor de un millón quinientos mil pesos para cada familia damnificada

Por lo brevemente expuesto, el Despacho no puede compartir la conclusión a que se llegó en el auto del 26 de mayo de 2017, en el sentido de declarar la falta de competencia subjetiva para seguir conociendo del asunto por considerar que la parte pasiva está integrada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad de orden nacional, y que por tanto la competencia está radicada en este Tribunal.


Como corolario de lo expuesto, el Despacho encuentra que no resulta procedente que este Tribunal avoque el conocimiento del expediente de la referencia en primera instancia, y por lo tanto se ordenará devolver el expediente al Juzgado remitente a fin que se continúe con el trámite de ley.

En consecuencia se dispone:

1.- **Abstenerse** el Tribunal de avocar conocimiento del expediente de la referencia, por lo expuesto en la parte motiva.

2.- Por Secretaría **devuélvase** el expediente al Juzgado Primero Administrativo Oral de Pamplona, para que se continúe con el trámite del mismo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


ROBIEL AMED VARGAS GONZÁLEZ
MAGISTRADO



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
NORTE DE SANTANDER**
CONSTANCIA SECRETARIAL

Por anotación en ESTD92, notifico a las partes la providencia anterior, a las 8:00 a.m.

hoy 12 8 JUN 2017

Secretaría General